

fué investido el poder ejecutivo. Segundo: que la competencia del juez que suscribe no puede ser dudosa para resolver el recurso pendiente porque este siempre procede contra la autoridad ejecutora del acto que lo motiva, según lo prevenido en la ley de 20 de Enero de 1869; y esa autoridad ejecutora es del Distrito Federal, aunque en algunos actos preparatorios hayan intervenido el Prefecto de Texcoco y el alcalde del pueblo de Oriconcuac, contra cuyos funcionarios, según manifiesta el quejoso en su escrito de fojas 6, no deduce ningún derecho. Por cuyos fundamentos, teniendo á la vista lo pedido por el Promotor fiscal y las demás constancias de autos á que en lo necesario me refiero, debía declarar y declaro: que la Justicia de la Union ampara y protege á José M. Santillan, por haberse violado en su persona la garantía consignada en el artículo 5º de la Constitución general. Hágase saber esta sentencia que se publicará, remitiéndose las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El C. juez lo mandó y firmó: doy fé.—*José A. Bucheli.*—*Joaquín Sánchez González.*

EFECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 7 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta ciudad por José M. Santillan, contra la comandancia militar de México que lo destinó al servicio de las armas en el batallón de línea número 17 en los primeros días del mes de Mayo, época en que no estaba suspenso el goce de las garantías constitucionales ni por lo mismo la á que se refiere el art. 5º de la Constitución federal, y considerando: que la consignación del quejoso al servicio militar ataca esa

garantía, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 14 del mes próximo pasado por el juez 1º de Distrito de esta ciudad, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á José M. Santillan, por haberse violado en su persona la garantía consignada en el art. 5º de la Constitución general.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CO. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre 9 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO que ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, promovió Don Juan Julian Cervera, contra el Gefe político de Orizaba, por violación de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el ciudadano español D. Juan J. Cervera, vecino de Maltrata del Canton de Orizaba, promovió este juicio de amparo y protección contra providencias dictadas por el C. Gefe político del mismo, Manuel Acevedo, que le violan las garantías individuales que otorga al hombre la Constitución federal de la República en sus arts. 13, 16, 18 y 19, en razón de que por

consecuencia de aquellas, ha sido molestado en su persona, domicilio, papeles y posesiones, sin los requisitos de la ley, fué reducido á prision y continúa en ella, sin que sea sancionado de delito que merezca pena corporal y sin que se justifique con un tanto motivado de juez competente y las demás formalidades que restablece el derecho. Lo probamos con el Pedido y informe correspondiente al expresado O. Jefe político, le comitieron siendo que no ha tenido más intervención en el negocio que habernos informado respecto del quejoso; al O. Gobernador del Estado, que para un extranjero de conducta perniciosa y que por orden de aquella autoridad superior lo redujo á prision y lo remitió á esta ciudad á disposición del Ejecutivo, y que este lo pasó al O. Gobierno Supremo; cuyo informe no fué acompañado de la debida justificación con infracción del art. 90 de la ley de 20 de Enero de 1869, que así lo determina. 72 junio 17 1881.

Corrido el traslado de testos ántes al infrascrito Promotor, y encontrándose sin datos suficientes para pedir en justicia sobre el amparo solicitado, se vió en la necesidad de promover, que se recibiera á prueba el juicio, como se decretó en auto de 12 de Marzo último, y por las pruebas y demás constancias producidas por el interesado, así como por las comunicaciones oficiales del Ministerio de relaciones exteriores, del O. Gobernador del Estado, del O. Jefe político de San Andrés Chalchicomula y de la misma autoridad ejecutora de los actos reclamados, resulta justificado. Primero; que en la noche del 14 de Febrero de este año, fué aprisionado D. Juan J. Cervera en la cárcel de Orizaba, por orden del O. Jefe político de aquel Canton y conducido á esta ciudad al día siguiente, quedando á disposición del O. Gobernador en la casa de detención en calidad de incomunicado, hasta pocos días después, en que se le ha permitido hablar

Tomo III — Parte II.

con las personas de su conocimiento y relaciones aunque sin levantarle la prision. Segundo; que el Ejecutivo del Estado dió cuenta al de la Nación de este hecho insertándolo en el respectivo oficio del O. Jefe político de Orizaba en que pedía y pretendía demostrar que era conveniente que se expulsara al Sr. Cervera de la República por ser extranjero pernicioso. Tercero; que el Supremo Gobierno se ha limitado á pedir los fundamentos y pruebas de esa asercion, para proceder á lo que haya lugar en el caso con arreglo á sus facultades constitucionales, pero sin haber aprobado ni ordenado las medidas violentas tomadas por la Jefatura política contra la libertad del expresado Sr. Cervera. Cuarto; que el mismo O. Jefe político está dispuesto contra el quejoso por no haber querido influir en el pueblo de su vecindad en favor de la candidatura de aquel cuando se hizo la elección de la persona que debé sucederle en el destino, circunstancia que inclina mucho el ánimo judicial en favor de la inocencia del que sufrió las consecuencias de la medida que ha motivado este juicio. Quinto; que el quejoso ha corroborado ese aserto con las declaraciones de los testigos presentados por él, que lo acreditan de persona honrada, laboriosa, de buenas costumbres y pacífica, con cuyas pruebas se advierte desde luego que no hubo el menor fundamento para tratarlo con menos consideraciones que á un criminal, pues que á este se le permite defenderse y se le hace saber quién lo acusa y por qué delito y quiénes deponen contra él, conforme al art. 20 de la Constitución federal, para que pueda fácilmente formular sus descargos y tachar los dichos de los testigos que no estén adornados de la imparcialidad debida. Sexto; que si bien el Supremo Gobierno tiene ya conocimiento para resolver lo que tenga por conveniente respecto de la expulsion de D. Juan J. Cervera, no es menos

cierto que ningún participio ha tenido en los hechos de que se queja, como lo expresa el O. Ministro de relaciones en su comunicación de fojas 11, dejándo la responsabilidad de ellos á cargo de las autoridades que los han motivado. Sétimo; que por lo mismo y no habiendo justificado la Jefatura política que sus procedimientos hubiesen sido arreglados á la ley, como debió haberlo hecho de conformidad con lo prevenido en el art. 90 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, es indudable que ha violado las garantías individuales que conceden al hombre los arts. 16, 18 y 19 que cita el interesado, estando comprendido el caso por consecuencia en la fraccion 1ª, art. 1º de la repetida ley orgánica sobre el modo de proceder en los juicios de amparo, puesto que aun cuando se tuviesen datos positivos de que el Sr. Cervera era pernicioso, para informar de su conducta al O. Presidente de la República que es á quien corresponde hacer la calificación, no era necesario ni conforme á la ley que se le molestase en su persona, papeles y domicilio, sino antes bien observar la segunda parte del art. 33 del pacto federal que concede expresamente á los extranjeros el derecho á las garantías individuales, salva en todo caso la facultad que el gobierno tiene para expelerlos de la República, se entiende, cuando los haya calificado de perniciosos, cosa que no ha sucedido todavía con el Sr. Cervera, como se advierte por el oficio de 16 del presente. Octavo; que el mismo artículo ya citado no faculta á ninguna autoridad para aprisionar ni molestar de modo alguno á las personas que se consideran de mala conducta antes que el Supremo Gobierno disponga lo conveniente, á no ser que hubiese cometido delito que merezca formarse causa para castigarlo con arreglo al código penal por el juez competente y con los requisitos establecidos. Noveno; que D. Juan J. Cervera no ha sido acusado co-

mo tal delincuente en ningún sentido, pues en todas las constancias de estos autos no aparece dato alguno que ampare ese concepto.

Por cuyos fundamentos de hecho y de derecho y de conformidad con lo prevenido en los arts. 101 y 102 de la Constitución federal y ley de 20 de Enero de 1869, considera el infrascrito Promotor que no obstante la facultad constitucional que está ejerciendo el O. Presidente de la República respecto del Sr. Cervera conforme á la excepción que establece el art. 33 de la misma Constitución, es justo que se le ampare y proteja contra las providencias del O. Jefe político de Orizaba de que se queja, entre las cuales se enumera como principal la que dió origen á la prision innecesaria que está sufriendo, y en consecuencia pide al Juzgado se sirva así resolver en su sentencia y elevar los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión.

Heróica Veracruz, 27 de Abril de 1872.—*Lic. J. M. López de Escalera.*

SENTENCIA del O. juez de Distrito.

Heróica Veracruz, Setiembre 18 de 1872.—Vistos estos autos sobre protección y amparo solicitado por el súbdito español D. Juan J. Cervera contra providencias dictadas por el O. Jefe político del Canton de Orizaba Manuel Acevedo, que le violan las garantías individuales que le conceden los arts. 13, 16, 18 y 19 de la Constitución federal; y resultando de las actuaciones y documentos acumulados, que por consecuencia de aquellas providencias el quejoso ha sido molestado en su persona, domicilio, papeles y posesiones sin los requisitos de la ley, que fué reducido á prision y continúa en ella sin que hubiese sido acusado de delito que merezca pena corporal y sin que se justifique con un auto

motivado de juez competente y las demás formalidades que establece el derecho, pues aunque el expresado C. Gefe político pretendió que el Supremo Gobierno en uso de sus atribuciones lo calificara de pernicioso y lo expulsara de la República, debió esperarse el resultado de dicha pretension, para cumplir las órdenes que se le comunicaran, siendo por lo tanto extemporáneas é ilegales las medidas violentas de que se queja el Sr. Cervera; que esté por otra parte ha justificado su buena conducta y los motivos por qué lo persiguió la Gefeatura, que no ameritan ni legalizan su procedimiento; que el Gobierno Supremo no ordenó ni aprobó la prision del promovido, reservándose solamente el ejercicio de la facultad constitucional, y considerando que han sido innecesarias las medidas adoptadas por la Gefeatura política contra D. Juan Cervera, mientras se resolvía sobre su expulsión, por corresponder la calificación de la causa al Ejecutivo de la Union, y que por lo mismo han sido violadas las garantías que se han relacionado; por cuyos fundamentos y los demás de hecho y de derecho que expresa en su pedimento el C. Promotor fiscal, este Juzgado falla:—

Primero; La Justicia federal protege y ampara á D. Juan Julian Cervera contra las providencias dictadas por el C. Gefe político de Orizaba, Manuel Acevedo, entre las que se enumera la que dió origen á su prision, sin perjuicio de lo que resuelva el Supremo Gobierno en virtud de sus facultades constitucionales.

Segundo; Notifíquese á las partes, líbrense las copias que previene la ley y elévense los autos á la Suprema Corte de Justicia. Lo proveyó y firmó el C. juez de Distrito del Estado: damos fé.

—Lic. Luis I. Gómez.—De asistencia.
—Antonio F. Loredó.—Vicente Simán.

Es copia fielmente sacada de sus ori-

ginales. —H. Veracruz, Setiembre 20 de 1872. —Lic. Luis I. Gómez.—De asistencia.
—Antonio F. Loredó.—Vicente Simán.

RECURSOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

México, Octubre 9 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por D. Juan Julian Cervera, contra el Gefe político de Orizaba, C. Manuel Acevedo, por cuya orden fué el quejoso reducido á prision la noche del 14 de Febrero de este año, se le puso centinela de vista, que no le permitió comunicarse con persona alguna, ni encargarse del cuidado de sus intereses, se le condujo preso de Orizaba á Veracruz y se le conservó en rigurosa incomunicacion hasta el 25 de Marzo, violándose en su persona las garantías consignadas en los artículos 13, 16, 18 y 19 de la Constitucion federal, segun se refiere en el curso en que se pide el amparo, teniendo presente entre otros documentos que obran en el expediente el oficio de la autoridad responsable, fecha 21 del citado Marzo, en que se niega, en términos inconvenientes á rendir al Juzgado de Distrito el informe que en auto de 15 del propio mes se mandó que rindiese y se le pidió con fecha del día siguiente; y considerando que con las disposiciones del Gefe político de Orizaba, Cervera ha sido molestado en su persona, domicilio, papeles y posesiones, con infraccion de la ley que fué reducido á prision y conservado en ella sin que hubiese sido acusado de delito que merezca pena corporal, y sin que por auto de autoridad competente se hubiese motivado la prision y sin observar las demás formalidades legales, pues si bien el Gefe político de Orizaba procuró que el ejecutivo de la Union expul-

santa de la República de Cervera, como extranjero pernicioso, esto no lo anterior, para proceder como procedió, sino que en el caso de que la expulsión se ordenase, debió el Gefe político limitarse a cumplir las órdenes que sobre el particular le fueran comunicadas: que el Ejecutivo de la Unión no ordenó ni ha aprobado la prisión del quejoso ni las demás providencias tomadas contra él por el referido Gefe político, sino que se ha reservado en el caso del ejercicio de sus facultades constitucionales que por lo mismo se han atacado en la persona de Cervera las garantías, respecto de las que pide amparo, y que la negativa indicada de la autoridad contra quien se pide el amparo de rendir el informe que se le pidió por el Juzgado de Distrito, importa la infracción por parte del Gefe político de Orizaba, de art. 12 de la ley de 20 de Enero de 1869; por lo expuesto, se decretó: 1º que se confirme la sentencia pronunciada el 18 del mes próximo pasado por el Juez de Distrito de Veracruz, que declara: que la Justicia Federal ampara y protege a D. Juan Julian Cervera, contra las providencias dictadas por el C. Gefe político de Orizaba, Manuel Acevedo, entre las que se contiene la que da origen a su prisión, sin perjuicio de lo que resuelva el Supremo Gobierno en virtud de sus facultades constitucionales. 2º que se llama la atención del Gobernador del Estado de Veracruz, sobre la conducta del Gefe político de Orizaba que se negó a dar al Juez de Distrito los datos que era de su deber darle con arreglo a la ley, y por lo acordado por el J. J. no se resolvió.

Deveservanse las actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese a su vez en el Tocon de la As. por unanimidad de votos lo ha cretaron los Ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal

pleno de la Conferencia de la Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron: *Pedro Ogasan*, secretario. *F. de la Cruz*, *José B. Arce*, *Castillo*, *Velasco*, *M. Zavala*, *José García Ramírez*, *Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certificó, México, Octubre 12 de 1872. *Lic. Agustín Peraltá*, oficial mayor.

AMPARO de garantías. Promotor: *Julio de Distrito del Estado de México*, por *Julia Ramírez* a nombre de su marido *Benito Santa Ana*, contra el Gefe político de Orizaba que lo consigna al servicio de las armas. *Lic. Agustín Peraltá*, oficial mayor.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Juez de Distrito: *Benito Santa Ana*.

El Promotor Fiscal dice: que *D. Juan Benito Santa Ana*, con fecha 27 del próximo pasado Agosto, solicitó el amparo contra la autoridad política de esta ciudad que lo consignó al depósito de reclusión sin haber sido previamente calificado conforme a las prescripciones de la ley de 17 de Mayo último, y cuya solicitud ratificó el expresado *Santa Ana*.

En el informe que remitió el C. Gefe político con fecha 31 del mismo mes de Agosto se ve, que aquella autoridad, limitándose tan solo por los informes que tuvo de la conducta de *Santa Ana*, y sin pasarle a la junta calificadora lo destinó al servicio de las armas. De lo que resulta infiere, que el quejoso, está en su derecho para pedir el amparo de garantías, porque en su persona se han violado las que otorga la Constitución Federal en su artículo 5º.

En esta virtud, el que suscribe pide al Juzgado se sirva mandar que el Jefe